

V Jornadas de Sociología / I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales “Cambios y Continuidades sociales y políticas en Argentina y la región en las últimas décadas. Desafíos para el conocimiento social”, La Plata, UNLP, 10 al 12 de diciembre de 2008.

Mesa 37 “Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1970-2008)”

El lock-out patronal y la crisis política del kirchnerismo

Alberto R. Bonnet

Departamento de Ciencias Sociales (UNQ) y Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Email: abonnet@unq.edu.ar

Introducción

El lock-out capitalista agrario y el prolongado conflicto que se desató a partir de la modificación del régimen de retenciones a las exportaciones agrarias por parte de la administración de la presidenta Fernández pusieron en escena las limitaciones políticas del kirchnerismo. Pero estas limitaciones políticas eran previas –y ya las habíamos analizado en trabajos anteriores. Los mencionados *lock-out* y conflicto agrarios fueron, en realidad, el primer desafío político importante que enfrentó el kirchnerismo desde su ascenso al poder. Y alcanzó este primer desafío para poner en escena crudamente esas limitaciones preexistentes. Este texto retoma nuestro análisis previo del kirchnerismo abordando, a partir del mismo, esta crisis política, sus características y perspectivas. Y discute asimismo algunas de las muy variadas interpretaciones de dicha crisis realizadas en el seno de las organizaciones de la izquierda social y política.

Las características del conflicto

El kirchnerismo acaba de atravesar su primera prueba de fuego (aunque en este caso, alcanzó con el humo) y salió ciego y desorientado. El kirchnerismo remite de aquí en más a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de manera que el período en consideración se inicia en mayo de 2003 y se prolonga hasta el presente. Si bien estas administraciones electas de los Kirchner guardan una estrecha relación con su antecesora, la administración provisional de Duhalde, nos centraremos aquí exclusivamente en las primeras por razones que enseguida veremos. La prueba del humo que atravesó este kirchnerismo remite por su parte, naturalmente, al *lock-out* capitalista agrario y al conflicto en su conjunto que desató su intento de modificar el régimen vigente de retenciones a las exportaciones agrarias, es decir, al proceso que se extiende durante los cuatro meses que van desde el anuncio de un nuevo régimen de retenciones móviles (la resolución 125/08) por parte del entonces ministro de economía Martín Lousteau el 11 de marzo de 2008 hasta el anuncio de su derogación (el decreto 1176) por el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández el 16 de julio siguiente.¹ La caracterización de este proceso, acaso inédito en la historia argentina, es muy compleja y controvertida.² La intención de estas páginas no consiste tanto en caracterizarlo cuanto en analizar sus consecuencias políticas para el kirchnerismo. Sin embargo, para

¹ La Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción del 10/3/08, considerando el aumento y volatilidad de los precios internacionales de cereales y oleaginosas y su repercusión en los precios internos y en la inversión agropecuaria, establecía un sistema de retenciones móviles, dependientes de los precios internacionales, a las exportaciones de soja, girasol, maíz, trigo y sus derivados (el impuesto había sido establecido por Duhalde en febrero de 2002, tras la devaluación del peso, con una alícuota de 13,5% para la soja y girasol y de 10% para trigo y maíz, aunque estos porcentajes había sido incrementados posteriormente hasta alcanzar el 35% para la soja, 32% para el girasol, 28% para el trigo y 25% para el maíz desde noviembre de 2007). La Resolución 125/08 aumentaba a 44,8 y 44,2% los primeros y reducía a 27,7 y 32,8% los segundos, a los precios vigentes. En abril, en un intento de dividir a las corporaciones agrarias, el gobierno dictó dos Resoluciones (284 y 285/08) que reintegraban una parte de ese impuesto a los pequeños y medianos productores de soja y girasol. El decreto presidencial 1176, considerando en insólitas inflexiones argumentativas el fracaso del gobierno, derogó el conjunto.

² El mayor conflicto social rural de la historia argentina previa es el llamado *Grito de Alcorta* de 1912, pero sus protagonistas (los pequeños y medianos productores agrarios inmigrantes de la pampa húmeda de entonces, organizados de manera independiente y aliados a estibadores, braceros y otros trabajadores rurales) y sus reclamos (mejoras en su relación de arrendamiento, aparcería o mediería), así como las condiciones generales de la producción agraria, eran muy diferentes de los actuales. El régimen de tenencia del arrendamiento tradicional, que ya entonces no sólo era empleado por pequeños productores agrarios sino también por grandes productores pecuarios y mixtos que ampliaban así su capacidad productiva, comenzó a declinar ya en la década de 1920. Y los chacareros trigueros de Berni son hoy una especie en vías de extinción (véase Barsky y Pucciarelli 1991).

analizar estas consecuencias, es preciso detenernos en una caracterización somera de ese proceso.

El proceso en cuestión se inició con la respuesta de las organizaciones agrarias al mencionado anuncio de retenciones móviles. Y el comunicado *El campo dice basta* del 12 de marzo ya adelantaba, de alguna manera, las tres características distintivas más importantes del conflicto que sobrevendría. En primer lugar, fue firmado conjuntamente por las cuatro las organizaciones patronales agrarias más grandes: la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Estas cuatro entidades integrarían a partir de ese momento una Comisión de Enlace (a la que sumaría más adelante una suerte de cuarto grupo de productores autoconvocados) que dirigiría las acciones de la burguesía agraria en su conjunto. En este sentido, justamente, una de las características decisivas del conflicto fue la unidad en la acción prácticamente monolítica que mantuvieron esas organizaciones agrarias. Desde luego que subsisten diferencias parciales entre los intereses económicos de las fracciones de la burguesía que esas organizaciones representan, y sus dirigentes las manifestaron en algunos momentos del desarrollo del conflicto, pero nunca permitieron que pusieran en entredicho aquella unidad en la acción.³

Aquí se impone una observación: esta unidad en la acción no es una novedad. Las cuatro organizaciones ya habían protagonizado una tendencia creciente hacia la confluencia en discursos y acciones comunes durante la década de 1990, tendencia que se intensificó a partir de la devaluación y la imposición de las retenciones desde 2002 (Lattuada 2006).⁴ En particular la SRA, la más reticente de las cuatro a esa unidad, giró

³ Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Eduardo Buzzi de la FAA respecto de la necesidad de reformar el régimen de arrendamiento de tierra y restablecer una Junta Nacional de Granos, cuando se iniciaron las negociaciones con el gobierno (*La Nación* 12/4/08) y respecto de la alternativa entre reducción de las alícuotas de las retenciones y compensaciones a los pequeños y medianos productores, durante los debates parlamentarios de la primera quincena de julio (*Clarín* 2 al 4/7/08).

⁴ Las cuatro organizaciones presentaron sendos programas conjuntos a los gobiernos de Menem en 1994 y De La Rúa en 2001. CRA, CONINAGRO y FAA (con SRA en dos casos) realizaron 9 protestas agrarias nacionales con *lock-outs* comerciales y marchas y cerca de 20 asambleas y movilizaciones locales y regionales, durante la década de 1990 (de Lattuada 2006: VI). Estas acciones conjuntas se intensificaron a fines de la década y luego, desde el inicio del gobierno de Kirchner, cada nueva medida atinente a precios, retenciones o cupos de exportación de cereales, oleaginosas, carnes o leche enfrentarían nuevas asambleas, movilizaciones, marchas y *lock-outs* de estas organizaciones. La acción más importante, hasta este *lock-out* de marzo-julio de 2008, fue indudablemente la encarada por los productores de carne durante 2006. “Esto va a volver a ponerse pesado, como en 2006”, anticipó Mario Llambías de la CRA cuando el anuncio de las retenciones móviles (*La Nación* 12/3/08). Pero el primer *lock-out* conjunto de las cuatro

hacia esa estrategia desde la designación de Luciano Miguens como su presidente: “insistiremos en la conformación de un frente de acción conjunta con las demás entidades del sector, por la mayor fuerza que ello otorga a nuestros reclamos”, adelantó Miguens en su discurso de asunción, en septiembre de 2002 (*La Nación* 27/9/02). La importancia que revistió esta unidad en la acción durante el conflicto no puede menospreciarse: los grandes burgueses de la SRA aportaron su programa, mientras los pequeños y medianos de la FAA se encolumnaron detrás suyo, dotándolos de su mayor capacidad de movilización. Sin embargo, la afirmación de que los dirigentes de estos se comportaron como “idiotas útiles” de aquellos, que sugirió el gobierno y repitieron sus seguidores en varias ocasiones, es completamente infundada. En principio, el aumento de las retenciones hubiera afectado a la renta agraria y, por consiguiente, al conjunto de la burguesía agraria, ya sea grande o pequeña, empresaria o rentista, propietaria o arrendadora de tierras. Este simple hecho alcanzaba para sustentar aquella unidad. Y, en los hechos, estas cuatro organizaciones, junto con otras entidades agropecuarias y agroindustriales que enseguida mencionaremos, venían exigiendo desde comienzos de 2003, es decir, desde que la economía dejó atrás la fase más crítica de la depresión iniciada en 1997, la supresión lisa y llana de las retenciones (Makler 2008). Los sucesivos intentos del gobierno de minar esa unidad a través de medidas favorables a la pequeña y mediana burguesía agraria, entonces, no alcanzaron ningún resultado: sus representantes saludaron los anuncios, pero siguieron adelante con sus medidas de fuerza.⁵ Y, más allá de estos intentos, la seguidilla de torpezas políticas que desplegó el gobierno durante el conflicto en su conjunto, a las que nos referiremos más adelante, contribuyeron a galvanizar esa unidad.

El comunicado inicial de las cuatro organizaciones, en segundo lugar, sugería ya a grandes trazos la posibilidad de una nueva alianza social más amplia: era *el campo / el interior* quien se rebelaba frente a la medida del gobierno -aunque esta alianza se ampliaría más adelante hacia las ciudades. La burguesía agraria representada por esas cuatro organizaciones encolumnó detrás suyo, inmediatamente, a otros sectores de la burguesía con intereses en la producción agropecuaria o agroindustrial. En particular, varias entidades patronales importantes como la Coordinadora de las Industrias de

organizaciones a escala nacional contra el kirchnerismo es este que estamos analizando.

⁵ Véanse, en este caso, las declaraciones de Buzzi (*Clarín* 31/3/08) frente a los reintegros de retenciones, las compensaciones de costos diferenciales de fletes, la apertura de las exportaciones de trigo, el incentivo a las producciones de mayor valor agregado, los créditos blandos y la creación de una subsecretaría anunciados por Lousteau el 30 de marzo (y parcialmente implementados mediante las resoluciones 284 y 285 anunciadas el 17 de abril).

Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) o la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), respaldaron a esa burguesía agraria.⁶

Pero esta burguesía agraria arrastró detrás suyo, además, a amplias porciones de los sectores medios de las ciudades y pueblos del interior del país. También este fenómeno tiene un sustento. Por una parte, la modernización del capitalismo en el campo involucra la consabida creciente integración de los procesos de producción agrarios dentro del proceso de reproducción capitalista en su conjunto. La producción extensiva de cereales y oleaginosas de la pampa húmeda de nuestros días en particular implica así la producción, transporte y comercialización de semillas genéticamente modificadas y de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos, implica el empleo de maquinaria agrícola cada vez mas grande y compleja, implica asistencia técnica y variados servicios especializados, implica nuevos modos de almacenamiento y de transporte de su producto y el procesamiento agroindustrial del mismo (véase para un panorama, por ejemplo, Pizarro y Cascardó 1991 y Bisang 2007). El crecimiento de esa producción de cereales y oleaginosas, particularmente intenso durante esta década en la que se combinaron los procesos de innovación tecnológica y de expansión de la frontera agraria que venían de largo plazo con un tipo de cambio y precios internacionales favorables a corto plazo, acarrió, por otra parte, la recuperación económica e incluso cierta prosperidad para muchos pueblos y ciudades del interior del país. Un interior que, mientras tanto, se venía extendiendo junto con la extensión de la frontera agraria. Las mejoras en los niveles de consumo de los sectores medios de esos pueblos y ciudades se pusieron en evidencia así, por ejemplo, en los mercados inmobiliarios o en los parques automotrices locales. Desde luego que la mayor parte de las rentas y las ganancias generadas por aquella producción de cereales y oleaginosas no “se derraman” en esos pueblos y ciudades del interior del país. Los ingresos provenientes de las 150.000 has.

⁶ La manera más sencilla de apreciar este entramado es revisando las 40 entidades que integran el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina (www.foroagroindustrial.org.ar), que incluyen a la SRA, la CRA y las cámaras industriales antes mencionadas entre otras varias, pero también asociaciones de bancos (ABA y ADEBA), bolsas de cereales y comercio (Rosario, Santa Fé), etc. Veamos las reveladoras conclusiones de un informe publicado por este foro a fines de 2007: “De esa investigación surge que la eliminación de los derechos de exportación permitiría: - crear 300.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta; - contribuiría a reducir 6,9% la pobreza; - a la vez que se reduciría la recaudación en \$ 2.580 millones, cifra que podría ser recuperada por mayores ingresos de otros impuestos y por una actividad agroindustrial creciente” (Porto y Nogués 2007). Esta era la posición de la SRA: “ha llegado la hora de eliminar totalmente las retenciones”, había vuelto a reclamar Miguens en su discurso en la 141^o Exposición Rural, a mediados de ese año (*La Nación* 5/8/07).

explotadas por Los Grobo, ciertamente, no quedan en Carlos Casares. Pero alcanza con una parte menor de esas inmensas rentas y ganancias para motivar la movilización de amplios sectores medios de esos pueblos y ciudades del interior detrás de la burguesía agraria. No todas las 4x4 importadas de los piquetes eran de los productores sojeros y, además, también hubo algunos rastrojeros desvencijado. La masividad que revistieron las asambleas, los cortes, las marchas, los cacerolazos y demás acciones que tuvieron lugar en Gualeguaychú, Jesús María, Suipacha y muchas otras ciudades de la región pampeana evidencian que las demandas de la burguesía agraria gozaron de un amplio consenso en las mismas.⁷ Estos alineamientos con la burguesía agraria de otros sectores de la burguesía con intereses directos o indirectos en la producción agropecuaria o agroindustrial y de amplias porciones de los sectores medios de las ciudades y pueblos del interior del país explica, a su vez, el apoyo que recibieron de varios gobernadores, encabezados por H. Binner de Santa Fe y J. Schiarretti de Córdoba, y de la mayoría de los intendentes y consejales del interior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Esta burguesía agraria seguramente logró arrastrar también, en esas acciones, a algunos trabajadores. Este prolongado conflicto golpeó inmediatamente a sectores de la clase trabajadora empleados en la producción agropecuaria y agroindustrial, el transporte de cargas o el comercio de alimentos. En las posiciones adoptadas por algunos gremios vinculados con esa producción agropecuaria y agroindustrial, como las importantes Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, dejó una impronta la presión ejercida por aquella burguesía agraria. Los secretarios generales de dichos gremios, G. Venegas y J. A. Fantini, evitaron tomar partido entre las partes en disputa y convocaron al diálogo (véase *La Nación* 26/3 y 13/6, respectivamente). Sin embargo, otros gremios no menos vinculados con esa producción agropecuaria y agroindustrial y perjudicados por el conflicto, como la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la

⁷ Véanse apenas estos tres casos. El tractorazo y cacerolazo en el centro de Suipacha, Provincia de Buenos Aires (así como en otras ciudades) en repudio al discurso presidencial del 25 de marzo (*Página 12* 25/3); el masivo acto, con cerca de 8.000 personas, de la Mesa de Enlace en Jesús María, Córdoba, del 19 de abril (*Perfil* 20/4) y la asamblea reunida en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando la detención de A. De Angeli el 14 de junio (*Clarín* 15/6). ““Todos vivimos del campo y no pueden robarles más”, disparaba un vecino del lugar frente a las cámaras de TV. “Voy a defender al campo porque trabajo de ellos, vivo de ellos”, se sumaba a viva voz un lugareño dedicado a la industria metalúrgica” (*Página 12* 20/4). Testimonios como estos fueron usuales en las movilizaciones.

República Argentina (ATILRA), la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA) o la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), apoyaron más o menos decididamente al gobierno, junto con los restantes gremios de la CGT. Y en el seno de la CTA, cuyos gremios no guardan relación directa alguna con la producción agropecuaria y agroindustrial, el sector dirigido por H. Yasky (junto con la FTV de L. D 'Elía) se encolumnó activamente con el gobierno, mientras que el dirigido por C. Lozano intentó mantener distancia respecto del mismo. Los posicionamientos durante el conflicto de los distintos gremios parecen explicarse entonces más por los alineamientos políticos previos de los distintos sectores de la burocracia sindical ante el kirchnerismo que por los intereses económicos inmediatos de los trabajadores que agremian. Resumiendo, la alianza dirigida por la burguesía agraria no contó con un respaldo significativo de la clase trabajadora organizada pero, dejando de lado acciones puntuales como las de Moyano y sus camioneros en las rutas o de D'Elía y sus piqueteros en la plaza, tampoco fue especialmente activo el respaldo que brindó esa clase trabajadora organizada al gobierno. Los trabajadores asistieron más bien como “convidados de piedra” (Sartelli 2008) a este conflicto entre burguesía agraria y gobierno.

La alianza dirigida por la burguesía agraria logró extenderse, en cambio, hacia una porción importante de los sectores medios de las grandes ciudades, alcanzando así una masividad social y un impacto político que las pequeñas y medianas ciudades del interior no hubieran podido otorgarle. Las manifestaciones más contundentes de esa masividad y ese impacto político fueron las concentraciones convocadas por la Mesa de Enlace en el Monumento a la Bandera (Rosario) el 25 de mayo y en el Monumento a los Españoles (Ciudad de Buenos Aires) el 15 de julio. En ambos actos, la burguesía agraria reunió mucho más apoyo que el reunido por el gobierno en los actos que había convocado simultáneamente en el Monumento a Güemes (Salta) y el Congreso (Ciudad de Buenos Aires): unas 200 y 230.000 personas, contra 50 y 100.000, respectivamente (*Clarín* y *La Nación* 25/6 y 16/7/08). Por cierto, el saldo arrojado por estas dos grandes mediciones de relaciones de fuerza responde en parte a un retroceso de la capacidad de convocatoria del kirchnerismo respecto de coyunturas anteriores, pero mucho más significativa es la inédita capacidad de convocatoria, entre los sectores medios urbanos, demostrada por las organizaciones de la burguesía agraria. Estas concentraciones habían sido precedidas por una serie de cacerolazos y movilizaciones, acciones que habían concitado el apoyo de sectores medios acomodados (véanse los primeros cacerolazos, registrados en Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano y Caballito después del primer

discurso de la presidenta, del 25 al 27 de marzo; *La Nación* 26/3/08) e incluso en cierta medida habían sido impulsadas y encabezadas por individuos y organizaciones residentes en la ciudad aunque vinculados con el campo (véase por ejemplo el cacerolazo en Santa Fe y 9 de Julio del 12 de mayo; *Clarín* 13/5/08). Pero la magnitud alcanzada por las citadas concentraciones del 25 de mayo y del 15 de julio impide explicarlas a partir de estos restringidos antecedentes. Volvieron a demostrar más bien la capacidad de convocatoria de la que gozan ciertos representantes y/o organizaciones no-partidarios de la burguesía entre amplios sectores medios, capacidad cuyo antecedente más inmediato se encuentra en las concentraciones convocadas por J. C. Blumberg desde abril de 2004.⁸ Puede decirse en este sentido que la crisis del sistema de partidos políticos argentino, cuyo hito se sitúa en diciembre de 2001, no solamente impulsó la organización de nuevos movimientos sociales por parte de los trabajadores, sino también de la burguesía.

Esto nos lleva a la tercera característica distintiva del conflicto. El comunicado *El campo dice basta* del 12 de marzo anunció un *lock-out* por 48 horas, que prolongaría durante 15 días y sería reimplantado en otras dos ocasiones en abril y mayo. El *lock-out*, naturalmente, es la medida de fuerza burguesa por excelencia: consiste en el empleo por los capitalistas de su propiedad privada sobre los medios de producción como arma en la lucha de clases. Pero la burguesía agraria también tomó algunas armas prestadas. Los piquetes y asambleas en las rutas y en los accesos a empresas agroindustriales, así como los citados cacerolazos y movilizaciones de masas, son prácticas populares en las luchas sociales.⁹ Estas prácticas, desde luego, fueron encaradas mayoritariamente por los productores más pequeños reunidos en la FAA o autoconvocados, pero esto no niega que a través de ellos la burguesía agraria haya asimilado estas prácticas populares de lucha social y que esta sea otra de las características distintivas del conflicto.

⁸ La mayor concentración convocada por Blumberg, de 150.000 personas, fue la realizada en el Congreso el 1 de abril de 2004 (véase *Clarín* 2/4/08). A partir de allí se realizaron otras cuatro (22/4/08, 26/8/04, 2/5/05 y 31/8/06), pero cada vez más espaciadas y menos masivas.

⁹ El pacato Miguens de la SRA había declarado el 31 de julio de 2004, en la inauguración de la 138ª Exposición Rural, que “es hora de terminar con la confusión entre el derecho de peticionar y el delito de extorsionar”. El 20 de marzo, en cambio, reconocía ante *Radio 10* que “el piquete está de moda. Es la medida que más duele” (*Página 12*, 20/3/08). El Centro de Estudios Nueva Mayoría ya contabilizaba 1622 cortes de ruta agrarios en marzo de 2008, cifra que supera los cortes de ruta piqueteros del 2001 (1383) y que seguramente alcanzó a los del 2002 (2336) si le agregamos los registrados de abril a junio.

La crisis del kirchnerismo

Examinemos ahora el modo en que el kirchnerismo atravesó esta primera prueba de fuego, su conflicto con la burguesía agraria, y salió ciego y desorientado. Tengamos en cuenta, para este examen, las limitaciones políticas que ya habíamos identificado previamente en el kirchnerismo (Bonnet 2007a). El kirchnerismo, decíamos, repite el populismo como farsa. Y este conflicto suyo con la burguesía agraria no fue sino un nuevo acto de esta farsa. La presidenta, el ex presidente y muchos de sus funcionarios y seguidores se encargaron, en sus discursos, de que no quedaran dudas al respecto. Se empeñaron en resucitar, pasar revista y poner a desfilar a todos los muertos vivos que pueblan la mitología populista. Dieron el presente el pueblo versus antipueblo, la puta oligarquía, la fuerza bestial de la antipatria así como la fuerza popular organizada, una especie de golpe de estado y los golpistas genocidas, todos ellos invitados por D'Elía, la aristocracia del campo y los métodos golpistas de la mano de Moyano, el gobierno nacional y popular de las carpas kirchneristas, los señores de apellidos finolis de Tumini y los cuatro jinetes del Apocalipsis de Pérsico. El ex presidente Kirchner aportó innumerables invitados: a los especuladores, a la mesa y el bolsillo de los argentinos, a la batalla nacional, a la rendición incondicional y la derrota deshonrosa, a la sedición del campo y al campo de rodillas, a la Unión Democrática y a los golpes del 55 y el 76, a los comandos civiles y grupos de tareas, a la oligarquía que persiguió el cadáver de Evita y abrazó a Rojas y, naturalmente, a las banderas de Perón y Evita. La presidenta Fernandez de Kirchner fue más moderada, en virtud de su investidura, aunque aportó algunos otros: el sesgo predemocrático, las minorías egoístas, el aguante y los argentinos que estrechan filas y las clases sobre vacas, trigo y soja. También invitó al Acuerdo del Bicentenario, pero este tuvo que retirarse temprano del desfile.¹⁰

Pero el kirchnerismo dispuso también de una corte de intelectuales –desde la dictadura, siempre hay intelectuales disponibles para cualquier cosa por estos pagos– que festejaron su farsa. Con motivo de la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, en abril, un grupo de intelectuales dio a conocer una carta abierta para intervenir en una supuesta “confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos

¹⁰ Nos concentramos aquí en la crítica de este discurso porque estamos analizando la crisis del kirchnerismo, pero no podemos dejar de señalar que el discurso de las patronales agrarias fue por su parte un muestrario acabado de todos los lugares comunes de la reacción: desde el propio campo, dios, la virgen y la bandera de la patria, pasando por los políticos que deben hacer sus deberes de Roulet y el bife de chorizo a 80 pesos de De Angeli, hasta esa manera en que suenan los cachafaces en la boca de Forte y los huevos y mingas en la de Llambías.

históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía” (véase Gutierrez y Maiello 2008).¹¹ La carta seguía el rumbo de las consabidas alarmas con la que nuestros intelectuales progresistas, políticamente correctos, nos advierten periódicamente acerca de la peligrosa derecha que acecha en las sombras para justificar así su propio apoyo a la derecha que gobierna a la luz del día. La última alarma había sonado con motivo de la elección de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en apoyo del candidato Daniel Filmus.¹² Pero aquí interesa remarcar apenas que, si la presidenta, el ex presidente y sus funcionarios y seguidores resucitaron, pasaron revista y pusieron a desfilar a los muertos vivos de la mitología populista, los intelectuales progresistas disfrazaron esos muertos vivos con los harapos académicos más ridículos. Supimos así de un “clima destituyente” que vendría a ser “golpismo”, pero “no, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional”, sino en el sentido de “un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental”. Nuestros “integrantes de mundos políticos e intelectuales” agradecían así al kirchnerismo por instalar “un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente” y denostaban la “práctica de auténtica barbarie política diaria” que “consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva”, porque estaban resueltos a “oponer a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos”, y así sucesivamente (*Página 12* 15/5/08). Y no vaya a creerse que esta suerte de *Guerra de las Galaxias* narrada entre las cuatro paredes de una cátedra de Ciencias de la Comunicación de la UBA no aportó lo suyo al escenario principal de la farsa: en su primera reunión, el nuevo Consejo Nacional del PJ debuto unos días después con un documento en que denunciaba un “ataque antidemocrático con ánimo

¹¹ *La Carta Abierta / 1* fue adelantada en la citada inauguración de la Feria del Libro el 19 de abril y fue presentada completa en una mesa redonda integrada por N. Casullo, R. Foster, J. Sorín y H. Verbitsky en la Librería Gandhi y publicada en *Página 12* 15/5/08. La firmaban unos 1500, entre los que se encontraban los mencionados y J. P. Feinmann, F. Schuster, H. González, E. Rinesi, D. Viñas, E. Gruner, A. Kaufman, N. Galasso, etc. El colectivo, entusiasmado, publicó otras dos cartas abiertas: la *Carta Abierta / 2 Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones* centrada en los medios masivos de comunicación (*Página 12* 4/6/08) y la *Carta Abierta / 3 La nueva derecha* (*Página 12* 11/6/08).

¹² *La Carta Abierta / 3* no se privaba de recordar este antecedente cuando advertía contra una “nueva derecha” que “se piensa contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes” y mencionaba a continuación la “ilusoria eficiencia empresarial del machismo” (*Página 12* 11/6/08).

destituyente” (Página 12 28/5/08)...

Recordemos, en cualquier caso, que el kirchnerismo ya había intentado revestir los superávits fiscales con los que había engrosado las reservas con una virtuosa austeridad republicana acorde con la recuperación del estado como instrumento de un pretendido proyecto nacional y popular, convertir los pagos de deuda externa con los que había superado el *default* en un renacimiento de la autonomía del estado y la independencia de la nación, rodear las concesiones a las empresas privatizadas en materia de marcos regulatorios, subsidios, inversiones y salarios con alaridos acerca de revisiones y rescisiones de contratos, y demás (Bonnet 2007a). No puede sorprender entonces que esta vez, en su acto culminante, haya intentado envolver el reparto de la renta agraria entre fracciones de la burguesía con los harapos de la heroica lucha del pueblo contra el antipueblo.

Pero dejemos atrás estos raros discursos y vayamos a la crisis del kirchnerismo. Puede decirse que la administración de Néstor Kirchner había resultado exitosa en la medida en que había podido retomar y completar la tarea iniciada por su predecesora, a cargo de Eduardo Duhalde, consistente en revertir la profunda crisis de acumulación y dominación que había culminado en diciembre de 2001 preservando, al mismo tiempo, los avances de la reestructuración capitalista que la gran burguesía había alcanzado en la década de los noventa. Kirchner consolidó así la denominada *governabilidad* que había restaurado Duhalde, reconstruyendo los aparatos partidario y estatal y articulando el consenso necesarios para ejercer efectivamente su gobierno y para asegurar su sucesión. Pero es clave distinguir entre este consenso kirchnerista de 2003-2007 y una hegemonía política sólida como la menemista de 1989-2001. El consenso kirchnerista simplemente acompañó una política gatopardista que, en condiciones económicas expansivas, se limitó a preservar la reestructuración capitalista que se había realizado en el marco de una hegemonía neoconservadora durante la década previa. La capacidad política del kirchnerismo era, fundamentalmente, ni más ni menos que la contrapartida de la incapacidad política del resto ofrecer una alternativa ante el mismo –incluyendo desde luego a la propia izquierda social y política, como enseguida veremos. Téngase en cuenta especialmente aquí la incapacidad tanto del arco centroizquierdista como del derechista para organizarse como alternativa político-electoral ante el kirchnerismo, que viene ratificando la posición del PJ como único partido en condiciones de gobernar. Esto explica, en última instancia, el que alcanzara con este primer desafío político

importante, el *lock-out* de la burguesía agraria, para poner en escena sus estrechas limitaciones.

Veamos entonces la manera en que la administración de Cristina Fernández de Kirchner enfrentó dicho desafío para advertir estas limitaciones. Virtualmente, no hubo respuesta alguna que el kirchnerismo no ensayara, y, absolutamente, no hubo ninguna en la que acertara. La presidenta intentó ignorar lisa y llanamente la ofensiva de la burguesía agraria durante las dos primeras semanas del conflicto, hasta que ya no pudo seguir haciéndolo (entre el anuncio de las retenciones móviles el 11 y su discurso del 25 de marzo). El kirchnerismo midió fuerzas con la burguesía agraria en las calles, pero fue superado en su capacidad de convocatoria (en los citados actos del 25 de mayo y 15 de julio). El gobierno reprimió las acciones de la burguesía agraria, tanto mediante fuerzas de seguridad como mediante el empleo de organizaciones sindicales y sociales afines como fuerzas de choque (despeje de ruta por la Prefectura en San Pedro el 29 de marzo, represión y detenciones por la Gendarmería en Gualeguaychú el 14 de junio, ataque del Movimiento Evita y la FTV a los manifestantes de Plaza de Mayo el 25 de marzo, presiones de los camioneros de Moyano sobre los cortes de ruta desde el 20 de marzo) dotándolas así, involuntariamente, de un mayor consenso. El gobierno se sentó a negociar con la burguesía agraria pero, a la vez, sabotó y dilató dichas negociaciones (todo junto durante la tregua de 30 días de abril: concesiones del ministro Lousteau, presiones del secretario Moreno, promesas del ministro Fernández, desautorizaciones del ex presidente Kirchner y así sucesivamente). La presidenta anunció sobre la marcha un plan social de construcción de hospitales, caminos rurales y viviendas populares solventado con una porción de las retenciones (el 9 de junio por cadena nacional) sin que nadie le creyera. Y la administración, finalmente, envió el conflicto al parlamento sin contar de antemano con una mayoría segura y, el 16 de julio, fue derrotado en el Senado gracias al voto de senadores propios y de su propio vice-presidente! Esta increíble ineptitud política desplegada por el kirchnerismo durante el conflicto vino a confirmar así, retrospectivamente, que su aparente capacidad política no había sido sino la mera contrapartida de la incapacidad política del resto.

Señalamos antes que esta última incapacidad incluye también a la izquierda social y política. Veamos ahora su intervención durante el conflicto. Hay que reconocer que este tipo de conflictos suele plantear desafíos muy complejos para la izquierda, en la medida en que enfrentan a un gobierno burgués con un sector de la propia burguesía. Se trata más precisamente, en este caso, de un enfrentamiento entre distintas fracciones

de la burguesía, una de ellas coyunturalmente enfrentada con el gobierno, alrededor de la apropiación de la renta agraria. La complejidad del desafío planteado, sin embargo, no justifica de ninguna manera los desatinos políticos cometidos por una parte muy considerable de esa izquierda social y política durante el conflicto. Empecemos por el desatino (que debería ser, aunque desgraciadamente no lo sea) más evidente: el apoyo a la burguesía agraria en su pugna por apropiarse de la mayor parte posible de la renta. Vale la pena recordar que esa apropiación de renta es una relación de explotación. La renta es plusvalor remanente por encima de la tasa media de ganancia capitalista, que se origina en la apropiación privada monopólica de esa condición social de la producción que es la tierra. El apoyo a la burguesía agraria en su pugna por apropiarse de la mayor parte posible de la renta, en consecuencia, es sencillamente reaccionario por definición. Astarita acierta en este sentido cuando afirma: “la defensa de la renta agraria, cualquiera sea la forma que adopte, *es una bandera reaccionaria*. Este es un punto del programa del marxismo *incompatible con las reivindicaciones del movimiento de los productores agrarios pampeanos, y con los programas de los partidos defensores del sistema capitalista*” (2008: XI; subrayado en el original).

Es importante remarcar, para evitar malentendidos, que no estamos considerando aquí como reaccionaria esta defensa de la renta agraria porque equivalga a defender el ingreso de una vieja aristocracia terrateniente ya extinta sino porque, reestructuración capitalista mediante del agro pampeano, equivale a defender el ingreso de una moderna burguesía agraria.¹³ El desarrollo capitalista tiende pues a subsumir crecientemente la producción agraria a sus propias leyes. Tiende, más específicamente, a convertir la renta diferencial de tipo II en la modalidad dominante de renta, así como a otorgar mayor centralidad a la ganancia capitalista agraria, naturalmente. Es decir, tiende a convertir en la modalidad dominante de renta la proveniente de las sucesivas inversiones de capital incorporadas de manera permanente en la tierra y usufructuadas por su propietario, en desmedro de la renta diferencial de tipo I, proveniente de las diferencias naturales de productividad entre las tierras, y de la absoluta, proveniente de la menor composición

¹³ Esta aclaración es importante porque uno de los lugares ideológicos populistas más comunes durante el conflicto fue contraponer esforzadas ganancias de capitalistas a parasitarias rentas de terratenientes. A. Kicillof argumenta así que “la economía científica” (cientificidad que remite a Ricardo y Marshall, claro, no a Marx) enseña que “los dueños de las mejores tierras (como las de Argentina) se quedan con esa diferencia que no se debe a la inversión ni al esfuerzo sino a condiciones naturales” y permite concluir que “es falso entonces que las retenciones impliquen una confiscación de la ganancia legítimamente obtenida por los inversores, como en cualquier negocio” (en “La teoría económica contra los argumentos del campo”, en *Página 12* 30/3/08).

orgánica del capital agrario, sustraído de la tendencia a la nivelación, respecto de la composición orgánica media de la economía. Y, a esta altura, ya es evidente que el agro pampeano viene sufriendo, desde mediados de los sesenta, una intensa reestructuración capitalista que se desenvuelve en dicho sentido. El aumento del monto de la inversión en relación con la tierra y el trabajo empleados, la reducción absoluta del número de trabajadores asalariados y el aumento de la productividad del trabajo son componentes de esa reestructuración desde su inicio (véase Bocco 1991). Y se aceleraron en el marco de la aceleración de la reestructuración del capitalismo argentino en su conjunto de los noventa.¹⁴ A propósito del sector de la burguesía agraria que lideró este proceso de reestructuración capitalista agraria (unos 1000 grandes propietarios del 60% de la tierra, con 2.500 a 5000 has. cada uno), Pucciarelli y Castellani (1998: 69) sintetizaban a fines de los noventa: “las nuevas inversiones, los cambios tecnológicos y la adopción de la agriucultura deben haber generado un sustancial aumento del valor de la producción en los grandes establecimientos. Aumento del valor que, si tenemos en cuenta la evolución del mercado, obedece mucho menos a la elevación de precios que al aumento de los rendimientos físicos y económicos. Aumentos que han modificado seguramente el papel que la renta había jugado tradicionalmente en la composición del beneficio global del productor. La ganancia se halla ahora mucho más estrechamente asociada a la innovación de métodos y a la inversión de capital que a la renta de la tierra, en un contexto que ya no premia como antaño con mejores precios las ventajas naturales del suelo pampeano”. Estos precios se recompusieron significativamente durante la presente década –y además fueron potenciados por la devaluación del peso.¹⁵ Pero el aparato productivo agrario que enfrenta estas mejores condiciones sigue siendo el heredado de aquella reestructuración. Los *pools de siembra*, que alcanzaron el estrellato durante este conflicto, no son sino la versión más moderna de las empresas capitalistas agrarias resultantes de esa reestructuración.

Volvamos a los partidos de izquierda que cuidan los ingresos de esta burguesía agraria. Estos marcharon por una misma senda argumentativa, aunque con dos matices diferentes. Dicha senda estaría trazada en una supuesta estructura de clases existente en

¹⁴ Es por esta razón, dicho sea de paso, que quienes confunden esta reestructuración capitalista con una suerte de “predominio de la valorización financiera” (o alguna otra variante de esta concepción populista) no saben qué hacer ante esta evidente modernización agraria (véase por ejemplo Basualdo 2006: VII).

¹⁵ Esto dio lugar, naturalmente, a un importante incremento de la rentabilidad de la producción agraria pampeana durante esta década (aunque con reservas, véanse en este sentido los datos provistos por Rodríguez y Arceo 2006).

el agro y movilizada en el conflicto, dentro de la cual la izquierda maoísta (el PCR-CCC) insistió en apoyar a los campesinos y una porción de la izquierda trotskysta (encabezada por el MST) decidió apoyar a los chacareros. La posición adoptada por la primera era previsible a sabiendas de su tradición –e incluso de su militancia en una corriente interna de la FAA: convocó a una supuesta unidad obrero-campesina contra el gobierno: “la simultaneidad de los estallidos y paros obreros con la rebelión de los productores del campo, crea condiciones para avanzar en la unidad que es la base para enfrentar la política kirchnerista. Los trabajadores en las ciudades y los productores en el campo cortan las calles y las rutas, siguiendo el camino abierto por el Argentinazo. Es el camino opuesto a la ‘reconstrucción’ del Estado oligárquico-imperialista para el que trabaja la presidenta” (*Hoy* 1208 del 19/3/08). Pero esta posición enfrentaba una dificultad: la mayoría de esos campesinos no se contaban entre los que cortaban las rutas, sino que estaban en contra de los mismos, y los que cortaban las rutas no eran campesinos.¹⁶ Los verdaderos campesinos parcelarios, que se encuentran en las economías regionales extra-pampeanas, en el mejor de los casos, son ajenos a la producción extensiva de cereales y oleaginosas para la exportación y, en el peor, son sus primeras víctimas en la medida en que pierden sus tierras con la expansión de la frontera agraria que dicha producción impulsa -y así vienen enfrentándola desde los noventa (véase Giarraca 2008 y Domínguez y Sabatino 2008). (Hay que agregar además que, en cualquier caso, son un sector marginal en la estructura social argentina, de manera que la maoísta es una estrategia carente de sujeto.) Y los pequeños y medianos productores pampeanos de cereales y oleaginosas no son campesinos sino granjeros que logran vivir de rentas y/o ganancias, integrándose así de manera subordinada a la moderna producción capitalista agraria pampeana, o se arruinan cayendo afuera de la misma.¹⁷

¹⁶ Véanse los comunicados *Algunas memorias ante las protestas del ‘campo argentino’* del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y *A propósito del paro agropecuario* del Movimiento Campesino de Córdoba, del 20 de marzo. El MOCASE y el MCC son integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (aunque también el Frente Nacional Campesino se pronunció en contra de la burguesía agraria). Las posiciones de estos movimientos también se plasmaron parcialmente en el comunicado del Frente Popular Darío Santillán *Tierra, trabajo y soberanía alimentaria para todo el pueblo*, del 25 de marzo, aunque mezcladas con posiciones de la FAA.

¹⁷ Un dato alcanza para dar una idea del grado de concentración de la producción de cereales y oleaginosas pampeana: el 20% de los aproximadamente 84.000 productores totales de soja y girasol concentran el 80% de la producción. 16.800 empresas producen así 41,6 millones de toneladas anuales en 14,8 millones de hectáreas (881 has promedio), mientras que los 67.200 restantes producen 10,4 millones de toneladas en 3,71 millones de hectáreas (55 has promedio). El 2,2% concentra la mitad de la producción: 1848 empresas producen 26 millones de toneladas

El apoyo a estos granjeros por parte de una porción de la izquierda trotskysta resultó, en cambio, mucho más imprevisible. El periódico del MST, por ejemplo, convocó a la unidad entre “los trabajadores y la clase media de la ciudad” y “los pobres y sectores medios del campo”. Pero ahora estos últimos no eran campesinos. “El campo, como la ciudad, también tiene clases sociales, no sólo la minoritaria y privilegiada oligarquía, sino también los absolutamente mayoritarios pequeños y medianos productores, chacareros, peones y trabajadores rurales” (*Alternativa Socialista* 472 del 3/4/08). Esta posición, al menos, se refería a grupos sociales realmente existentes en el capitalismo agrario pampeano: trabajadores asalariados y granjeros. Pero enfrentada dos pequeñas dificultades, una con cada uno de dichos grupos. La referencia a los “peones y trabajadores rurales” no venía a cuento porque en ningún momento sus demandas estuvieron en juego durante el conflicto –y, ciertamente, ni la burguesía agraria grande ni la pequeña, que clamaban por su renta, las sumó a las suyas. Esto a pesar de que los aproximadamente 1.300.000 trabajadores asalariados rurales –un 10% de ellos en la región pampeana– son uno de los sectores más castigados de la clase trabajadora en cuanto a precariedad (75% de empleo en negro) y salarios (\$ 1.500 promedio en marzo) (Neiman 2008). La referencia a los “pequeños y medianos productores, chacareros”, venía más a cuento porque, como ya dijimos, estos desempeñaron un papel protagónico en el conflicto: el papel de infantería al mando de los generales de la SRA. Pero menos a cuento venía que un partido de izquierda convocara a sumarse a esta infantería. No hay razón alguna, en términos estratégicos, que indique que la izquierda deba apoyar las demandas de apropiación de plusvalor en concepto de renta o ganancia de estos sectores pequeños o medianos de la burguesía agraria –aún cuando estuvieran disputando dicho plusvalor con los grandes. Y además, en el conflicto que nos ocupa, estos sectores pequeños y medianos de la burguesía agraria se subordinaron a los grandes en su demanda conjunta de apropiación de una porción mayor de plusvalor frente al estado –o sea que ni siquiera pueden esgrimirse razones tácticas. La única razón que queda es un lamentable oportunismo político.

Pasemos ahora al desatino opuesto, menos evidente (aunque no menos grave), de la izquierda social y política: el apoyo al gobierno en contra de la burguesía agraria. El

en 9,29 millones de hectáreas (5000 has promedio) (datos del CEMA). Las características de la estructura agraria pampeana fueron motivo de mucha controversia; para una reseña acerca de los debates sobre concentración y centralización de la tierra (particularmente entre O. Barsky y A. Pucciarelli por una parte y E. Basualdo y M. Khavisse por otra) puede consultarse Barsky (1997).

gobierno intentó presentar este enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía alrededor de la apropiación de la renta agraria como una disputa sobre la distribución de la riqueza entre el pueblo y la oligarquía, mediante el argumento de que el aumento de las retenciones apuntaba a contener el aumento de los precios de los alimentos al desvincularlos de los internacionales.¹⁸ Y además empleó subsidiariamente otros tres argumentos: que la movilidad de las retenciones reducía la incertidumbre que afectaba a la inversión agraria a raíz de las grandes fluctuaciones de los precios internacionales, que la diferencialidad de las retenciones reducía el incentivo a producir soja revertiendo la *sojización* y que el incremento en la recaudación derivado del cambio del régimen de retenciones se destinaría a gastos sociales.

Ninguno de estos argumentos era disparatado, desde un punto de vista técnico-económico. Por esta razón un grupo de conocidos economistas “comprometidos con la reindustrialización y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social” pudo avalarlos en su conjunto en una solicitada que titularon, muy sintomáticamente, *Los economistas rechazamos el lock out*. Y otros economistas progresistas siguieron sus pasos.¹⁹ Pero en los hechos no estaban rechazando el *lock out* como economistas, desde una supuesta ciencia, sino apoyando al kirchnerismo como intelectuales, desde una posición política. Porque todos esos argumentos eran no menos falsos, desde un punto de vista político. Veamos. Un aumento de las retenciones hubiera desvinculado en mayor medida los precios internos respecto de los internacionales y en consecuencia hubiera tendido a desacelerar el aumento de estos últimos. Pero esta no era la finalidad perseguida por ese aumento de las retenciones. Hay varias razones para afirmarlo. Las retenciones actúan mucho más indirectamente sobre los precios de los productos que componen la canasta familiar que otros instrumentos anti-inflacionarios.

¹⁸ Los considerandos de la resolución 125/08 sólo contenían “Que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual” y “Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario”. Pero ya durante el anuncio de la resolución el ministro Lousteau agregó un tercer argumento: “se pretende un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad agropecuaria”, es decir, revertir la *sojización* (*La Nación* 12/3/08). Y la presidenta agregó un cuarto argumento cuando anunció la creación por decreto 904/08 del “Programa de Redistribución Social” para la construcción de hospitales, viviendas caminos con la recaudación extra aportada por las retenciones móviles (*La Nación* 10/6/08).

¹⁹ Véase *economistasconralockout.blogspot.com*. Los economistas en cuestión son, entre otros, E. Basualdo, J. Schvarzer, M. Rapoport, M. Kulfas, G. Lugones, A. Gak, E. Arceo, R. Feletti, H. Trincherro, A. Rofman, P. Español, G. Wierzba y la ex ministra F. Miceli. Véanse también, por ejemplo, los artículos de los economistas del CENDA de la UBA publicados en *Le monde diplomatique* 107 en mayo y en el citado dossier del Suplemento Cash de *Página 12* 30/3/08.

La producción de soja y girasol y sus derivados están decididamente orientadas hacia la exportación: se exportan 6,3 de los 7,2 millones de toneladas de aceite de soja que se producen y 1,4 de las 1,7 millones de toneladas del de girasol. E incluso, dentro del alza generalizada de los precios internacionales de los alimentos registrado desde mediados de la década, los precios del trigo y el maíz se incrementaron en mayor proporción que los precios de la soja y el girasol, mientras que el gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones de estos pero redujo levemente las retenciones a las exportaciones de aquellos.²⁰ El componente exógeno, además, es sólo un componente de la inflación doméstica, junto con otros endógenos. Y, en cualquier caso, hay otros instrumentos que actúan mucho más directamente sobre el costo de la canasta familiar como, por ejemplo, la desgravación de los productos y servicios de consumo masivo.

Los otros tres argumentos son mucho más endeble. Algunos analistas afirmaron que la supresión de la volatilidad de los precios internacionales hubiera afectado a los mercados de futuros y a los sistemas de comercialización y acopio. Pero, en cualquier caso, la burguesía agraria dejó en claro que prefería seguir rigiendo sus decisiones de inversión por rentas mayores aunque fluctuantes, a pesar de la incertidumbre, que por rentas menores aunque fijas. Este argumento pronto fue archivado. Nadie consideró en serio la repentina preocupación del gobierno por la ecología o la soberanía alimentaria, amén de que incentivar la producción de trigo y maíz reduciendo las retenciones a su exportación podría resultar contradictorio con aquella supuesta intención de contener los precios de la canasta familiar. Y mucho menos la ocurrencia de último momento de que la recaudación derivada del cambio del régimen de retenciones se destinaría a gastos sociales. El kirchnerismo, hasta las 18:11 horas del 9 de junio de 2008, había contado el originalísimo relato del primer impuesto de la historia que un gobierno aumenta sin fin recaudatorio alguno. Ese día y hora la presidenta corrigió el relato por cadena nacional: en realidad, se recaudarían unos USD 1.300 millones extra, pero serían destinados a hospitales, viviendas y caminos (*Clarín* 10/6/08). Y también el ex presidente se sinceró, un poco después: “Si se suspenden las retenciones, ¿con qué vamos a pagar la salud, los hospitales, las obligaciones externas de los argentinos?” (*La Nación* 4/7/08). A la luz de los montos a los que ascienden los vencimientos de deuda

²⁰ Entre 2005 y 2008 los precios internacionales del trigo y el maíz se incrementaron un 28,6 y un 25,7% contra un aumento del 24,8% del precio del aceite de soja y un descenso del precio del aceite de girasol del -7% (datos del *World Economic Outlook* del FMI). La 125/08 aumentó las retenciones a la soja del 35 al 44,1% y al girasol del 32 al 39,1% promedio, mientras que redujo las retenciones al trigo del 28 al 27,1 y al maíz del 25 al 24,2%.

externa para 2008 y 2009, así como de los anuncios de pago de la deuda con el Club de París y de re-negociación con los *hold-outs* realizados antes del desencadenamiento de la crisis financiera mundial, quizás el ex presidente se haya sincerado demasiado...²¹ Antes, el kirchnerismo había salido del *default*, pagando. Ahora, el kirchnerismo quería evitar volver a caer en ese *default*, pagando. Pero pagando sólo una parte de la deuda. La otra parte quería refinanciarla en el mercado financiero internacional, a cuyos brazos ahora quería volver, pagando. (Y, eventualmente, otra parte más la pagarían los jubilados en casa, a través de las AFJPs y la ANSES.) Pero semejante ratificación de la recuperación de la autonomía del estado y la independencia de la nación (véase Bonnet 2007), esta vez, requería una guerra sin cuartel contra la antipatria.

Estamos de nuevo así ante el consabido enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía alrededor de la apropiación de la renta agraria. Pero debemos añadir dos precisiones, para que no se entienda esta afirmación de una manera demasiado estrecha. No nos referimos específicamente a un enfrentamiento entre una supuesta fracción agraria (representada por las organizaciones de la burguesía agraria) y otra supuesta fracción financiera (representada por los organismos financieros internacionales). El equilibrio (digamos: *cuasi-bonapartista*) entre distintas fracciones de la burguesía que las administraciones kirchneristas intentaron sostener durante el lustro pasado y que entró en crisis durante su conflicto con la burguesía agraria es más complejo que un equilibrio entre dos supuestas fracciones agraria y financiera de la burguesía. En primer lugar, porque esas fracciones se definen de una manera más compleja (la agroindustria e incluso parte de la banca se alinean con la burguesía agraria, las empresas de servicios públicos privatizadas suelen alinearse con la burguesía financiera, y así sucesivamente). Y en segundo lugar, más importante aún, porque los intereses del agro y las finanzas no son los únicos en juego en el conflicto (quizás la presión de los vencimientos de deuda sobre el presupuesto haya sido la más intensa en esta coyuntura, pero también está la

²¹ Los vencimientos ascienden para 2008 y 2009, respectivamente, a unos USD 11.341 y 11.202 millones de amortizaciones, USD 4.287 y 3960 millones de intereses y USD 503 y 207 millones de cupones atados a PBI (*Infobae* 4/8/08). Se estimaba, hacia mediados de año, que el gobierno sólo pagaría unos USD 11.000 del total resultante, mientras que intentaría refinanciar unos 4.500 millones en el mercado doméstico, vendiendo compulsivamente bonos a la ANSES y las AFJPs y otros 4500 en el mercado internacional. La necesidad de regresar al mercado financiero internacional condicionó a su vez el dichos anuncios de pagar la deuda pendiente con el Club de París, de USD 6.700 millones según el gobierno, con reservas de libre disponibilidad del BCRA (como había hecho Kirchner con la adeudada al FMI en diciembre de 2005) (*Clarín* 3/9/08) y de volver a negociar con los *hold-outs* (USD 31.000 millones que no habían entrado en canje realizado por Kirchner a comienzos de 2005) (*La Nación* 22/9/08). La crisis financiera mundial de octubre, de todas maneras, suprimió este escenario.

presión de los innumerables subsidios directos e indirectos a los servicios públicos, a la industria, etc.)

La otra precisión que debemos añadir es que, si bien en un comienzo la decisión del gobierno de cambiar el régimen de retenciones vigente persiguió fundamentalmente un objetivo recaudatorio, a partir de cierto momento del desarrollo de su conflicto con la burguesía agraria la insistencia del gobierno en su decisión pasó a responder a razones exclusivamente políticas. La diferencia entre ambos regímenes de retenciones hubiera involucrado, a los precios internacionales de las oleaginosas de ese momento, un aumento de la recaudación de unos USD 1.500, contra vencimientos de deuda de unos USD 16.000 o un gasto público de unos 60.000 millones para 2008. Esa cifra, aunque significativa, no compensa ni los costos económicos ni los costos políticos del conflicto, según ningún cálculo razonable. La insistencia del gobierno en su decisión, a partir de cierto momento, pasó en realidad a responder al objetivo de imprimir una suerte de derrota políticamente aleccionadora sobre el *lock out* de la burguesía agraria. Un diario puso en boca del ex presidente una frase que sintetiza este objetivo: “los voy a poner de rodillas” (*Crítica de nuestro tiempo* 4/5/08). Conocemos el resultado de esta insistencia: la genuflexión del ex presidente. Pero, aún dejando de lado este resultado, la decisión era disparatada desde el punto de vista de la propia política burguesa. El gobierno kirchnerista no intentó imponer una derrota política aleccionadora a la clase trabajadora con un amplio respaldo de la burguesía –como el gobierno menemista, por ejemplo, cuando la huelga ferroviaria de 1990-92- sino una derrota política aleccionadora a una fracción de la burguesía sin apoyo significativo de las restantes fracciones de la misma y en su propio beneficio político. La burguesía en su conjunto, incluso aquellas fracciones que apoyaban las retenciones móviles, condenó este exceso de autonomía exigiendo una y otra vez que el gobierno negociara.

A esta altura, va de suyo que el apoyo que brindaron ciertas organizaciones de la izquierda social y política al gobierno en su puja con la burguesía agraria fue, en este marco de enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía, un desatino político. Sólo vamos a añadir otras tres consideraciones. Hubo, en primer lugar, una modalidad de apoyo al gobierno por parte de ciertas organizaciones sociales y políticas (en especial la FTV de D’Elía, pero también el Movimiento Evita, el Movimiento Barrios de Pié y otras) que las convirtió en sus fuerzas de choque. Esta conversión de organizaciones sociales y políticas en fuerzas de choque a las órdenes del gobierno constituye la más profunda degradación de las prácticas de lucha de los trabajadores: viene a ratificar

desde abajo la convicción burguesa de que la clase trabajadora, lejos de ser un sujeto capaz de emanciparse a sí mismo, es una masa de maniobra a su servicio. Las prácticas serviles de estas organizaciones fueron pues decididamente reaccionarias.²²

Existe, en segundo lugar, una razón para rechazar ese apoyo brindado por las organizaciones de la izquierda social y política al gobierno que es más profunda e independiente de las características de este conflicto con la burguesía agraria. Dijimos antes que la administración de Néstor Kirchner había retomado y completado la tarea iniciada por su predecesora, de Eduardo Duhalde, consistente en revertir la profunda crisis de acumulación y dominación que había culminado en diciembre de 2001. El ítem decisivo en esa tarea era, naturalmente, terminar de desactivar el ascenso de las luchas sociales que había conducido a dicha crisis. Y justamente en este ítem el kirchnerismo había sido especialmente exitoso: no sólo había terminado de desactivar ese ascenso de las luchas sociales, sino que había sumado el apoyo activo de una considerable porción de organizaciones sociales y políticas, piqueteras, partidarias y de derechos humanos a su farsa. El objetivo político prioritario de la izquierda en la coyuntura del conflicto del gobierno con la burguesía agraria seguía siendo, en consecuencia, minar el apoyo que esas organizaciones sociales y políticas (y la clase trabajadora en su conjunto) venían brindando al gobierno, y no enrolarse en su supuesta cruzada contra la burguesía agraria y reforzar así ese apoyo. Aún en caso de que pudiera afirmarse que, en este conflicto, las organizaciones de la burguesía agraria representaban intereses más reaccionarios que los representados por el gobierno, la independencia política de la clase trabajadora y sus organizaciones era mucho más importante que la imposición de estos sobre aquellos.²³

Puede objetársenos, en tercer lugar, que no apoyar a ninguno de los dos bandos en el conflicto entre gobierno y burguesía agraria era adoptar una posición abstracta que privaba a la izquierda social y política de su capacidad de intervención en dicha disputa. Pero hay que replicar, primero, que intervenir políticamente en un conflicto no equivale necesariamente a tomar partido por uno de los bandos en disputa –en caso contrario, la

²² Desgraciadamente, estas prácticas no son novedosas: se remontan al menos hasta los bloqueos de estaciones de servicios realizados por la FTV durante el primer conflicto del gobierno de Kirchner con la empresa Shell en marzo de 2005.

²³ Algunas organizaciones sociales y políticas sostuvieron durante el conflicto posiciones que, aunque con varios matices más o menos importantes, apuntaban a preservar esa independencia política de la clase trabajadora. Tales fueron los casos de algunos partidos trotskystas (PO, PTS, MAS) y del FPDS. Y hubo dos solicitadas con cierta circulación, *Ni con el gobierno ni con las entidades patronales 'del campo'* (en *Página 12* 23/5/08) y *Otro camino para superar la crisis* (publicada en varios sitios web y algunos extractos en *Página 12* 30/5/08), firmadas por varios intelectuales, militantes y organizaciones sociales y políticas de izquierda, en ese sentido.

izquierda solo podría intervenir ante una guerra tomando partido por uno de los ejércitos enfrentados, entre otros disparates. Esta objeción sólo puede ser correcta, entonces, bajo determinadas circunstancias. Y hay que replicar justamente que, bajo las circunstancias vigentes en el conflicto entre gobierno y burguesía agraria, esta objeción es incorrecta. Si la negativa a apoyar a alguno de los dos bandos en conflicto –i.e., al gobierno, porque cualquier apoyo a la burguesía agraria debía descartarse por razones de principios- era una posición abstracta, lo era justamente porque la izquierda social y política contaba de antemano con una capacidad de intervención política muy escasa en dicho conflicto. En otras palabras: si la izquierda social y política tuviera mayor incidencia en la escena política doméstica, hubiera podido (y quizás hubiera debido) intervenir políticamente en el conflicto apoyando el aumento de las retenciones porque hubiera podido preservar al mismo tiempo la independencia política de la clase trabajadora.

Algunas perspectivas

Señalemos ahora, a manera de conclusión, algunas perspectivas. Comencemos repasando las dimensiones de esta crisis del kirchnerismo, resultante de su conflicto con la burguesía agraria. En primer lugar, la propia ruptura del bloque en el poder que implicó el conflicto con la defección de la fracción de la burguesía vinculada directa o indirectamente con la producción agraria y agroindustrial -ante una actitud, agreguemos, más bien pasiva de sus restantes fracciones- es la primera dimensión de la crisis política del kirchnerismo. Esta ruptura del bloque en el poder es la primera desde aquella entre los partidarios de la continuidad y profundización de la convertibilidad del peso a través de la dolarización y los partidarios de la devaluación del peso, que se registró entre 1999 y 2001 y se saldó con la devaluación de la administración de Duhalde a comienzos de 2002 (Bonnet 2008: VI). Desde aquella coyuntura hasta este conflicto con la burguesía agraria, por cierto, ninguna de las fracciones de la burguesía había sacado los pies del plato servido por el kirchnerismo. Y, aunque esta ruptura del bloque en el poder aún no se expresó en la organización de ninguna alternativa política al kirchnerismo, representa ya en sí misma un componente de la crisis política del mismo.

El conflicto, en segundo lugar, impactó duramente en las propias filas de la administración kirchnerista. Desató una crisis de gabinete que cargó sucesivamente con

el ministro de economía Martín Lousteau, el ministro de interior Alberto Fernández, un hombre clave de ambas administraciones kirchneristas, y el secretario de agricultura Javier de Urquiza. Enfrentó además con el ejecutivo nacional a varios gobernadores justicialistas (a Schiarretti de Córdoba, pero también menos ruidosamente a Uribarri de Entre Ríos y Colombi de Corrientes, a Jaque de Mendoza y Gioja de San Juan, a Brizuela del Moral de Catamarca y Herrera de La Rioja, y a Das Neves de Chubut) y a la muchos de los intendentes y concejales justicialistas del interior de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y partió los bloques parlamentarios oficialistas. Las retenciones se impusieron en Diputados por una ajustada mayoría de 129 contra 122 votos, para caer en Senadores tras un empate en 36. En ambos casos, el kirchnerismo no contó con los votos de varios representantes del PJ e incluso del Frente para la Victoria (15 Diputados y 13 Senadores) y de sus aliados (del Frente Cívico y Social de Catamarca, de la Concertación, del Movimiento Popular Neuquino, del Frente Cívico de Santiago del Estero; véase *Perfil* 5 y 16/7/08). La coalición de gobierno, finalmente, quedó irreversiblemente cuestionada después del voto en contra del vice-presidente Julio C. Cobos en el Senado.

Y, en tercer lugar, el conflicto despejó el terreno para la organización de alguna alternativa política de recambio del kirchnerismo, ya sea desde adentro o desde afuera del justicialismo. En efecto, los enfrentamientos dentro del PJ que acabamos de reseñar pusieron en abierta oposición al oficialismo a varios referentes importantes del PJ como Duhalde, Solá, Reutemann, Schiarretti, Busti y Marín). Y el citado voto en contra de Cobos abrió la posibilidad de cierta recuperación de la alicaída y dividida UCR y de su integración dentro de una coalición opositora de centroizquierda con el PS de Binner y la Coalición Cívica de Carrió. Esto, sin embargo, sigue siendo sólo una posibilidad. La posibilidad de que se integre una coalición opositora de derecha, en cambio, sigue siendo más incierta. Esta es una situación paradójica, ciertamente, pues no fue un nuevo ascenso de las luchas sociales sino una avanzada profundamente reaccionaria de una fracción de la burguesía la que inició esta crisis del kirchnerismo. Pero en los hechos ninguna de las fuerzas de derecha existentes (esto vale especialmente para el macrismo) pudo mejorar su posicionamiento a partir de esta crisis política. Es razonable conjeturar, empero, que ese carácter profundamente reaccionario de la avanzada que inició la crisis del kirchnerismo se impondrá de todas maneras en el sistema político: si no alentando una nueva alternativa de derecha, quizás sí alentando alguna alternativa justicialista o centroizquierdista más derechista (digamos, encabezada por Duhalde o Carrió).

En síntesis, esta crisis política abre un escenario característico en el que, después de cinco años, el kirchnerismo parece comenzar a perder su iniciativa y su consenso. Las distintas fracciones de la burguesía reclaman, cada vez más violentamente, por sus intereses inmediatos. La Iglesia toma aún mayor distancia del gobierno. Los medios masivos de comunicación, hasta ayer condescendientes, se convierten en medios de la oposición. La burocracia sindical se inquieta. Las fuerzas políticas opositoras, débiles y dispersas, empiezan a reagruparse y a envalentonarse. El apoyo se deteriora entre los trabajadores. Y el gobierno pierde paulatinamente su iniciativa hasta quedar merced a los vaivenes de la coyuntura. Las repercusiones en la economía doméstica de la crisis financiera global, que está amenazando con hundir en la depresión el mercado mundial, pueden por sí mismas volver irreversible esta pérdida de rumbo del kirchnerismo. La razón es sencilla. El kirchnerismo no reemplazó los mecanismos de disciplinamiento de mercado sobre los trabajadores vigentes durante la década de los noventa y colapsados en 2001, sino que simplemente se dedicó al gatopardismo durante un lustro de bonanza económica (véase Bonnet 2007b). Y, si se acaba la bonanza, se acaba el gatopardismo.

Referencias

Astarita, R. (2008): *Economía política de la dependencia y el subdesarrollo*, inédito.

Balsa, J., Mateo, G. y Ospital, M. S. (2008): *Pasado y presente en el agro argentino*, Bs. As., UNQ-CONICET-Lumiere.

Barsky, O. (ed.) (1991): *El desarrollo agropecuario pampeano*, Bs. As., Grupo Editor Latinoamericano.

Barsky, O. (1997): “La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana”, en O. Barsky y A. Pucciarelli (eds.): *El agro pampeano. El fin de un período*, Bs. As., FLACSO – Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.

Barsky, O. y Pucciarelli, A. (1991): “Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas”, en Barsky (1991).

Barsky, O. y Dávila, M. (2008): *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*, Bs. As., Sudamericana.

Basualdo, E. M. (2006): *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Bs. As., FLACSO – Siglo XXI.

Bisang, R. (2007): “El desarrollo agropecuario en las últimas décadas. ¿Volver a creer?”, en B. Kosacoff (ed.): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007*, Bs. As., CEPAL.

Bocco, A. (1991): “El empleo asalariado”, en Barsky (1991).

Bonnet, A. (2007a): “Kirchnerismo: el populismo como farsa”, en *Periferias. Revista de Ciencias Sociales* 14, Bs. As., FISyP.

Bonnet, A. (2007b): “Argentina: ¿un nuevo modelo de acumulación?”, en *Anuario del EDI* 3, Bs. As., AEDI.

Bonnet, A. (2008): *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*, Bs. As., Prometeo.

Domínguez, D. y Sabatino, P. (2008): “La conflictividad en los espacios rurales de Argentina”, en *Laboratorio on line* 22, Bs. As., Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA.

Giarraca, N. (2008): “La Argentina y la democratización de la tierra”, en *Laboratorio on line* 22, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA.

Gutierrez G. y Maiello, M. (2008): “El ‘ser’ de la intelectualidad K. Apóstoles y monaguillos del nuevo conformismo”, en *Lucha de clases* 8, Bs. As., IPS Karl Marx.

Lattuada, M. (2006): *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*, Bernal, UNQ.

Makler, C. A. (2008): “Los discursos de las organizaciones corporativas ruralistas ante los derechos de exportación (1958-62 y 2002-06): materiales para su estudio”, en Balsa, Mateo y Ospital (2008).

Neiman, G. (2008): “El trabajo agrario en el cambio de siglo: regiones, trabajadores y situaciones”, en Balsa, Mateo y Ospital (2008).

Pizarro, J. B. y Cascardo, A. R. (1991): “La evolución de la agricultura pampeana”, en Barsky (1991).

Porto, A. y Nogués, J. (2007): *Evaluación de los impactos económicos y sociales de las políticas públicas en la Cadena Agroindustrial*, Documento del Foro de la Cadena Agroindustrial, www.foroagroindustrial.org.ar, noviembre de 2007.

Pucciarelli, A. R. y Castellani, A. G. (1998): “Notas sobre la evolución de la noción de latifundio e hipótesis sobre la transformación de las grandes estancias en la época actual”, en *Revista de Ciencias Sociales* 9, Bernal, UNQ.

Rodriguez, J. y Arceo, N. (2006): “Renta agraria y ganancia extraordinaria en Argentina, 1990-2003”, en *Realidad Económica* 219, Bs. As., IADE.

Sartelli, E. (2008): “El convidado de piedra. La cuestión agraria, la clase obrera y la política kirchnerista”, en *El Aromo* 42, Bs. As., CEICS.